

EN LO PRINCIPAL: Recurso o Solicitud de Aclaración

OTROSÍ: Solicita Aumento de Plazo

Daniel García Schilling
Director General de Supervisión de Conducta de Mercado
Comisión para el Mercado Financiero

Michael Clark Varela, chileno, casado, ingeniero comercial, en representación de **Inversiones Antumalal Limitada** sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en Aurelio González 3716, Vitacura, al señor Director General de Supervisión de Conducta de Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), respetuosamente digo:

Por medio de la presente vengo en interponer recurso de aclaración en contra del OF. ORD: 170499, de 26 de diciembre de 2024, (“oficio ordinario”) solicitando se aclare lo que se solicitará a continuación, en virtud de los antecedentes que a continuación se señalan.

El oficio ordinario, luego de un análisis de la operación a través de la cual Inversiones Antumalal S.A., adquirió 6.354.981 cuotas de la serie única del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, de 13 de diciembre de 2024, concluye que la operación no habría dado cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 199 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, señalando: *“Lo anterior representaría una infracción a las normas citadas de la Ley de Mercado de Valores, por lo que este Servicio **le instruye a adoptar las medidas pertinentes para subsanar las infracciones expuestas**. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio por parte de esta Comisión de las potestades de supervisión que le competen, o la instrucción de un procedimiento administrativo sancionador en los términos prescritos en el Decreto Ley N°3.538, que Crea la Comisión para el Mercado Financiero.”* (el destacado es nuestro).

El presente Recurso tiene por objeto solicitar a usted aclarar el oficio ordinario, y particularmente el párrafo final, de tal manera de que pueda señalar de forma explícita y concreta cuales serían a juicio de la autoridad *“las medidas pertinentes para subsanar las infracciones expuestas”* que se nos instruye adoptar (el subrayado es

nuestro), ya que resulta imposible descifrar o entender aquellas “medidas pertinentes” que la autoridad nos “instruye adoptar”.

Como resulta evidente, mediante dicho oficio nos otorga una instrucción (“este Servicio le instruye”) de “adoptar las medidas pertinentes”, pero sin señalar cuáles serían aquellas, lo que pone de cargo de este solicitante intentar “adivinar” aquello que la autoridad pudiere entender que son, precisamente, aquellas medidas pertinentes que estima del caso que se lleven a efecto. Adicionalmente, esto podría conllevar al sinsentido de que -aun cuando este recurrente pudiera adoptar cualesquiera clases de medidas por *motu proprio*- estas pudieren estimarse por la autoridad como no pertinentes o no ser, en definitiva, aquellas que, en rigor, podría pretender se lleven adelante y que, por tanto, debe instruir.

Sin perjuicio de que, como señalamos anteriormente, en nuestro parecer, la norma del artículo 199 de la Ley 18.045 no resulta aplicable a la operación de adquisición de cuotas del Fondo de Inversión Privado de fecha 13 de diciembre de 2024, por lo que se ajustó a la normativa vigente estaremos llanos en poder analizar y adoptar las “medidas pertinentes” que la autoridad nos instruya, “para subsanar las infracciones expuestas” y que la autoridad entienda se pudieron haber cometido

Demás está señalar que la obligación de impartir instrucciones claras y objetivas, que es el fundamento de este recurso, constituye una obligación de autoridades y jefaturas de los servicios, lo cual queda plasmado en el artículo 64 del DFL 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el cual establece que: “*Serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas las siguientes: c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y **de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios.***” (destacado es nuestro).

Si la obligación anterior constituye una exigencia respecto de los subordinados, con mayor razón le es extensible a los administrados, ya que lo anterior es una de las bases de la seguridad jurídica que debe existir en todo procedimiento administrativo, siendo esa la razón por la que nuestra legislación reconoce en la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, el principio de escrituración, el cual busca dar seguridad jurídica mediante -precisamente- la escrituración, que no es otra cosa que concretizar lo abstracto, transformándolo en tangible, de forma tal que pueda ser captado por todos de manera clara y precisa, garantizando entre otros el debido

proceso, cuya regulación normativa principia en la Constitución Política de la República.

POR TANTO,

En mérito de lo expuesto y disposiciones constitucionales y legales aplicables,

A UD. SOLICITO:

Tener por interpuesto recurso de aclaración, acogerlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo, aclarando la parte final del oficio ordinario indicado en el cuerpo de esta presentación, de modo tal que puedan entregársenos solicitudes y/o instrucciones claras y precisas, con su correspondiente fundamento legal, respecto de cuáles son las acciones suficientes para subsanar las infracciones que a su juicio existirían.

OTROSÍ: En virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 19.880, vengo, en tiempo y forma, en solicitar aumento y extensión del plazo para dar respuesta clara y precisa al oficio ordinario 170.499 de manera tal de poder acceder y/o cumplir con lo que Ud. resuelva al tenor de lo principal de esta presentación. En este sentido, este solicitante manifiesta, desde ya, su disposición a acoger y/o ejecutar aquello que la autoridad pudiere solicitar o instruir, de manera precisa, al tenor de la aclaración solicitada en lo principal de esta presentación.